

El Mundo, 17/Junio/2009

Los alcaldes exigen unero para poder hacer accesibles sus pueblos en 4 años

Califican la nueva norma del Consell de «excelente» pero esperan que la ley vaya acompañada de financiación para poderla cumplir

A. C. / M.J.G./M.J.A./Valencia
La teoría es «excelente». En este balance coinciden todos los alcaldes. Pero, ¿y en la práctica? ¿Van a tener que financiar los ayuntamientos toda la inversión para que sus municipios sean 100% accesibles? Los ayuntamientos exigen que la nueva ley que prepara el Consell y que presentan hoy venga acompañada de financiación.

La normativa contempla un último para los consistorios de más de 20.000 habitantes. En cuatro años, a contar desde que se apruebe la ley, deben tener toda la ciudad adaptada a los minusválidos,

el transporte público también. Las localidades con menos habitantes tendrán un plazo de ocho años.

Este periódico consultó ayer a varios alcaldes de grandes municipios que consideraron que la norma no puede ir sola, sino que debe llevar aparejada financiación autonómica. Desde Sagunto el concejal de Movilidad Urbana, José Luis Martí, advirtió que «no se puede aplicar de la misma forma en todas las ciudades». En su caso, por ejemplo, la zona más antigua de la localidad, en la que existen muchas calle empinadas sería muy

complicado obtener el 100% de la adaptabilidad. Martí dijo que «cada municipio tiene unas particularidades, por lo que el baremo no puede ser el mismo para todas. De hecho, la orografía y la antigüedad de muchas calles es un factor a tener en cuenta».

No obstante, tal y como apuntaron ocurre en otros ayuntamientos, en Sagunto ya se invierte en este sentido. Concretamente, 292.000 euros anuales en materia de accesibilidad para la realización de aceras, pasos elevados y otros elementos necesarios, aunque admitió que queda mucho por hacer.

En Quart de Poblet, la alcaldesa socialista Carmen Martínez, recriminó que «el PP está acostumbrado a invitar a copas con el dinero de otros», advirtió del cargo de servicios que ya soportan los ayuntamientos y que escapan a sus competencias y denunció que los consistorios están «hartos de que se legisle al margen de las administraciones locales». Martínez calificó la iniciativa de «excelente» pero refutó que se lleva a cabo sin dotación económica.

La Concejal de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Requena, Pilar Pallardó, advirtió ayer que no conocía de primera mano la propuesta del Consell, no obstante consideró que «sería estupendo para una ciudad como Requena», aunque puntualizó que para que sea efectiva debe tener un buen respaldo económico.

Manises, por su parte, considera que es una buena iniciativa técnicamente factible pero financiera-

mente complicada, mas aun en los tiempos que corren.

La mayor parte de los consistorios consultados explican que ya han hecho actuaciones en este sentido y que el plan Zapatero ha servido para adelantar mucho en este terreno. Pero la experiencia de alguna de ellas refleja la dificultad de que los ayuntamientos puedan cumplir con la futura norma si no hay ayudas del Consell para aplicarla. En Torrent, por ejemplo, se han destinado dos millones de euros para hacer 500 puntos accesibles. Y con ellos, todavía queda el 70% de la ciudad por adaptar. Además, este 30% se ha realizado en dos años.

En Gandía y Oliva, donde aseguran que llevan años trabajando en adaptar sus ciudades y donde han destinado buena parte del plan Zapatero a hacer puntos accesibles consideran que, por su cuenta, podrán cumplir con la norma en la fecha establecida.